

GUINEA ECUATORIAL: Nivel 3

Guinea Ecuatorial es país de origen de niños que son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual (trata sexual) y país de destino para hombres, mujeres y niños sometidos a trabajos forzosos. La mayoría de las víctimas de la trata son explotadas en Malabo, Bata, Mongomo y Oyala, donde el aumento de la construcción y una floreciente actividad económica financiadas por la riqueza petrolera, han impulsado la demanda de mano de obra barata y la prostitución. En estas ciudades se explota a niñas de Guinea Ecuatorial como parte del comercio sexual, y hay padres que alientan a sus hijas a ejercer la prostitución, sobre todo con extranjeros, a cambio de víveres, regalos, vivienda y dinero. Menores principalmente de países vecinos, como Nigeria, Benín, Camerún, Togo y Gabón, pueden ser forzados a trabajar en el servicio doméstico, como braceros en el mercado, vendedores ambulantes y lavanderos. Se recluta a mujeres de Camerún, Benín y otros países vecinos para trabajar en Guinea Ecuatorial, y posteriormente se las puede someter a trabajos forzosos o a prostituirse. Grandes contingentes de mujeres chinas emigran a Guinea Ecuatorial para trabajar o dedicarse a la prostitución, y puede que les confisquen los pasaportes. Personal subcontratado en la industria del petróleo y en el sector de la construcción, entre ellos hombres y mujeres que emigran desde otras partes de África, Asia y las Américas, pueden ser vulnerables al trabajo forzoso ya que sufren condiciones laborales ínfimas y en algunos casos, pueden ser objeto de la confiscación de pasaportes. La corrupción general y la complicidad de los funcionarios del gobierno en los delitos de la trata de personas fueron prácticas habituales durante el periodo de análisis de este informe.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no hace esfuerzos significativos para lograrlo. Durante el periodo del informe, en el país no se tomaron medidas para identificar ni proteger a las víctimas de la trata ni tampoco para enjuiciar a los tratantes, a pesar de contar con una ley que prohíbe todas las formas de trata de personas y dispone la prestación de servicios a las víctimas. El gobierno deportó a inmigrantes indocumentados sin tratar de averiguar si eran víctimas de la trata ni remitirlos a servicios de asistencia. Tampoco proporcionó capacitación alguna a los funcionarios ni hizo campañas para la concientización sobre la trata de personas;

en tanto que la Comisión Interministerial de Lucha contra la Trata de Personas siguió sin cumplir con sus funciones. Debido a que el gobierno cuenta con recursos financieros considerables y que a pesar de ello no ha logrado ninguna mejora en relación con el periodo de análisis anterior, el país permanece en el Nivel 3.

RECOMENDACIONES PARA GUINEA ECUATORIAL

Aplicar la ley de 2004 contra la trata de personas y enjuiciar y condenar a los delincuentes y a los funcionarios cómplices; elaborar procedimientos formales de identificación de las víctimas de la trata entre los trabajadores menores de edad, los inmigrantes indocumentados y las mujeres y niñas que ejercen la prostitución; destinar fondos para albergar y proteger a las víctimas de la trata y establecer un sistema formal para remitirlas a los servicios asistenciales; capacitar a los trabajadores sociales, agentes del orden y funcionarios de inmigración en los procedimientos de identificación y remisión de las víctimas de la trata; poner fin a la deportación sumaria de hombres, mujeres y niños extranjeros sin antes determinar si son víctimas de la trata y, si procede, prestarles asistencia y repatriarlos en condiciones de seguridad, si esa es su voluntad; notificar a las embajadas cuando se haya detenido a alguno de sus ciudadanos en cumplimiento del derecho, los acuerdos y las reglamentaciones internacionales; reactivar la Comisión Interministerial de Lucha contra la Trata de Personas y asignarle recursos para que pueda facilitar la elaboración y aplicación eficaz de un plan de acción nacional destinado a combatir la trata de personas e investigar el alcance y las características del problema en el país; y lanzar una campaña nacional para que el público tome conciencia sobre la lucha contra la trata de personas.

ENJUICIAMIENTO

El Gobierno de Guinea Ecuatorial no hizo esfuerzos significativos para hacer cumplir las leyes contra la trata de personas durante el período de este informe. La ley de 2004 contra el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas prohíbe todas las formas de trata y establece penas de 10 años a 15 años de cárcel, que son castigos suficientemente severos y acordes con las penas previstas para otros delitos graves, como la violación. El gobierno no preparó estadísticas sobre la aplicación de la ley, ni tampoco investigó, enjuició ni condenó a ningún delincuente sospechoso de la trata de personas en 2014. Tampoco proporcionó ningún tipo de capacitación para combatir la trata a las fuerzas del orden. El gobierno no investigó, enjuició, ni condenó a funcionarios cómplices de delitos de

la trata de personas durante el periodo de este informe; no obstante, la corrupción general y la complicidad de los funcionarios en los delitos de trata de personas eran prácticas habituales.

PROTECCIÓN

El gobierno no tomó medidas para proteger a las víctimas de la trata, con lo que no las identificó ni las remitió a servicios de protección en el transcurso del año. Aunque la ley de 2004 contra la trata dispone que el gobierno tiene la obligación de proporcionar asistencia legal, atención psicológica y médica, alojamiento, alimentos, acceso a la educación, capacitación y oportunidades de empleo a las víctimas de la trata, las autoridades no prestaron ninguno de estos servicios. Las fuerzas del orden no emplearon procedimientos para identificar de forma activa a las víctimas de la trata ni se esforzaron, ya fuera en forma sistemática o con fines específicos, para remitirlas a organizaciones que proporcionan asistencia. La falta de un proceso activo de identificación de víctimas, incluidos los procedimientos para detectar a los deportados, menoscabó la capacidad del gobierno de prestar asistencia a los extranjeros víctimas de la trata y de garantizar que no se los sancionara por actos ilícitos cometidos como resultado de dicha condición. Por el contrario, el gobierno habitualmente detuvo a nacionales extranjeros, entre ellos posibles víctimas de la trata de personas, en comisarías de policía durante días o meses, y rara vez notificó a sus embajadas acerca de su detención o deportación. En muchos de estos casos, fuerzas del orden o funcionarios de la frontera sobornaban a los detenidos y deportaban a quienes no querían pagar. La gran mayoría de estos detenidos eran hombres jóvenes, si bien a veces también se detuvo y deportó a mujeres y niños. El gobierno no proporcionó a los extranjeros víctimas de la trata otra opción legal que no fuera la deportación hacia países donde podrían sufrir represalias o penurias.

PREVENCIÓN

El gobierno no tomó medidas para evitar la trata de personas ni lanzó ninguna campaña de concientización para el público en general, en tanto que la Comisión Interministerial de Lucha contra la Trata de Personas siguió sin cumplir con su función. Las autoridades no aplicaron programas para abordar el tema del trabajo forzoso de menores ni tampoco identificaron a ningún menor víctima de ello, pese a disponer de alrededor de 13 inspectores encargados de documentar infracciones laborales. Durante el año, el gobierno no adoptó ninguna medida específica para

reducir la demanda de actos sexuales con fines comerciales o de trabajo forzoso. Tampoco proporcionó capacitación ni orientación al personal diplomático en materia de lucha contra la trata de personas.